

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Luz Estela Arbeláez Amaya
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 08 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 008 2019 00061 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 095 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Reactivación de pensión de invalidez, persona con pérdida de capacidad laboral superior al 50% según dictamen decretado dentro del proceso –
DECISIÓN	Confirma sentencia consultada

En la fecha, **veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento en relación con el grado jurisdiccional de consulta en favor de **Colpensiones**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Luz Estela Arbeláez Amaya**. Radicado único nacional 05001 3105 **008 2019 00061** 01.

La Magistrada ponente en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los Acuerdos del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto estudiado, discutido y aprobado en sala virtual mediante acta **Nº 016**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación.

Antecedentes

La demandante convocó a juicio a Colpensiones pretendiendo se declare la nulidad del dictamen emitido por dicha entidad el 27 de septiembre de 2018, el cual le determinó una pérdida de capacidad laboral del 30,65% estructurada el 20 de septiembre de 2018, y en su lugar, se establezca que presenta una pérdida de capacidad laboral del 53,08% estructurada el 22 de octubre de 2001, según dictamen de la IPS Universitaria, en consecuencia, se le reactive la pensión de invalidez que venía recibiendo, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Pide también condena en costas.

En sustento de ello manifestó que nació el 7 de noviembre de 1964, siendo pensionada por invalidez mediante Resolución 2146 del 28 de febrero de 2003, a partir del 22 de octubre de 2001, al haber sido calificada desde esa fecha con una pérdida de capacidad laboral del 53,50%, prestación que recibió hasta julio de 2018 al haberle manifestado la entidad que, para poder seguir recibiendo dicha prestación, tenía que someterse a un examen médico, siendo citada para el mismo y sin que le fuera analizada su historia clínica fue valorada, y fruto de ello, mediante Resolución 275551 del 22 de octubre de 2018, Colpensiones le declaró la extinción del reconocimiento y pago de la pensión. Afirma que el 25 de enero de 2019 le fue realizado por parte de la IPS Universitaria un nuevo estudio, el cual arrojó una pérdida de capacidad laboral del 56,08% estructurada el 22 de octubre de 2001.

En auto del 7 de febrero de 2019 se admitió y ordenó dar trámite a la acción y debidamente notificada **Colpensiones**, procedió a dar respuesta, aceptando la fecha de nacimiento de la demandante, el contenido de la resolución que le concedió la prestación y la que le suspendió la misma, así como la valoración de la pérdida de capacidad laboral por parte de la IPS, frente a los demás supuestos de hecho manifestó que no le constan. Se opuso a la prosperidad de

las pretensiones al carecer de fundamentación fáctica y legal, y propuso las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la declaratoria de nulidad de dictámenes, inexistencia de la obligación de reconocer pensión de invalidez, retroactivo e intereses moratorios, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción, innominada y compensación.

Decisión de primera instancia

Contenida en sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito, en la que declaró la nulidad el dictamen médico emitido el 27 de septiembre de 2018, dándole plena validez al experticio rendido dentro del proceso por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, el 20 de enero de 2020, en consecuencia, condenó a Colpensiones a reactivar la pensión de invalidez de la actora a partir del 9 de diciembre de 2018, calculando el valor del retroactivo adeudado entre esa fecha y el 28 de febrero de 2021, en la suma de \$26.840.531,00. A partir del 1 de marzo de 2021 la mesada pensional a cancelar será de \$908.526,00, incluidas las adicionales de junio y diciembre, sin perjuicio de los aumentos de Ley. Autorizó a Colpensiones a descontar de la suma adeudada el valor concerniente a aportes en salud. Dispuso la indexación de la condena a partir del 9 de diciembre de 2018. Declaró no probadas las excepciones propuestas, e impuso costas a cargo de Colpensiones, fijando las agencias en derecho en \$1.817.052,00.

Argumento la falladora que el dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes para tal fin, como al Manual Único de Calificación de Invalidez, el último reporte de historia clínica, y las ayudas diagnósticas, de las cuales se evidencia que la estructuración de la invalidez, data del 9 de diciembre de 2018, al ser la fecha en la que se le realizó la resonancia magnética nuclear de rodilla, la cual, confirmó el grado de afectación en esta estructura corporal, diagnóstico que baremado y acorde con la norma la llevó al

estado de invalidez, declarando con ello la nulidad del dictamen emitido por Colpensiones.

Al considerar que el dictamen rendido, el cual dio cuenta de una pérdida de capacidad laboral de más del 50%, resultaba procedente ordenar la reactivación de la pensión de invalidez en cuantía de un salario mínimo y en razón a 14 mesadas al año, tal y como había sido otorgada por la entidad, sin que para el caso hubiese operado el fenómeno extintivo de la prescripción. Absolvió del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, disponiendo la indexación de la condena y la deducción del porcentaje destinado a salud del retroactivo pensional.

Al no haberse interpuesto recurso alguno contra la decisión y ser esta adversa a los intereses de Colpensiones, se conoce de la misma en el grado jurisdiccional de consulta.

Dando aplicación a lo establecido en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, se le corrió traslado a las partes para alegar, haciendo uso de los mismos

Siendo esta la oportunidad para ello se procede al pronunciamiento de fondo, previas las siguientes,

Consideraciones

Como hechos debidamente acreditados en los autos, no discutidos en esta instancia, y que se tornan relevantes para resolver se tiene: que mediante dictamen 3536 del 22 de octubre de 2001, el ISS calificó a la actora con una pérdida de capacidad laboral del 53,50% estructurada el 21 de octubre de 2001, por el diagnóstico de "*depresión mayor*" indicándose que "*hace tres años empezó a presentar episodios de llanto fácil, ingesta de licor cada 8 días, ha tenido intentos de*

suicidio...”, razón por la cual en Resolución 2146 del 28 de febrero de 2003, se le reconoció a la misma, una pensión de invalidez en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, a partir de la fecha de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral; que el 22 de agosto de 2018, Colpensiones le informa a la señora Luz Estela Arbeláez que “teniendo en cuenta que usted tiene una prestación económica reconocida en razón del estado de invalidez y de conformidad con la norma antes transcrita, esta Administradora en ejercicio de sus competencias, previa verificación de los sistemas de información con los que contamos, ha constatado que a la fecha no se ha sometido a la Revisión del Estado de Invalidez a la que ha sido convocado, en este sentido se procedió a suspender el pago de las mesadas pensionales, a partir de nómina de agosto de 2018”; que en dictamen 6635 del 27 de septiembre de 2018, Colpensiones calificó a la actora con una pérdida de capacidad laboral del 30,65% estructurada el 20 de septiembre de 2018; mediante Resolución SUB 275551 del 22 de octubre de 2018, se declaró “la extinción del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con ocasión de la revisión del estado de invalidez”, bajo el argumento que de acuerdo con el dictamen 6635 del 27 de septiembre de 2018, notificado a la actora el 1 de octubre de 2018, la misma no es una persona invalida; que en dictamen rendido en primera instancia por la Facultad Nacional de Salud Pública, se determinó que la actora presenta una pérdida de capacidad laboral del 50,8% estructurada el 9 de diciembre de 2018, por los diagnósticos de “deficiencia pro artrosis de rodillas y manos bilateral, deficiencia por trastorno afectivo bipolar, deficiencia por síndrome del túnel del carpo moderado bilateral” dejándose por sentado que la actora tiene una “depresión mayor hace 9 años, por épocas peor y otras mejor /.../ trastorno mixto de ansiedad y depresión”

Así las cosas, el **problema jurídico** en esta instancia, se circunscribe a establecer si es dable tener en cuenta el dictamen decretado en sede de instancia y rendido por la IPS Universitaria, y con el mismo indicar que la actora readquiere o reanuda su derecho pensional bajo los mismos requisitos legales inicialmente concedidos, por acreditar, un porcentaje igual o superior al 50% de pérdida de capacidad laboral.

Pues bien, frente a la revisión del estado de invalidez, el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 establece:

ARTÍCULO 44. REVISIÓN DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ. El estado de invalidez podrá revisarse:

a. Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiera lugar.

Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.

El pensionado tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de dicha solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez. Salvo casos de fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide dicha revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión. Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma fecha sin que el pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión prescribirá.

Para readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permanecer inválido deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán pagados por el afiliado;

b. Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa. (resaltos intencionales de sala)

Por su parte, el Decreto 1889 de 1994 que reglamentó la norma antes transcrita, en su artículo 7 dispuso:

ARTÍCULO 17. REVISION DEL ESTADO DE INVALIDEZ. *Cuando por efecto de la revisión del estado de invalidez a que se refiere el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, se determine la cesación o la disminución del grado de invalidez, se extinguirá el derecho a la pensión o se disminuirá el monto de la misma, según el caso.*

/.../

PARAGRAFO. *Cuando la revisión de la invalidez produzca un aumento de su grado que incremente el valor de la pensión de invalidez, así lo reconocerá la entidad administradora del régimen solidario de Prima Media con prestación definida.*

De acuerdo con lo anterior, la revisión periódica del estado de invalidez procura comprobar si el pensionado mantiene su calidad de inválido o, por el contrario, ha dejado de serlo, e igualmente, si la pérdida de la capacidad laboral ha aumentado o disminuido. Así, si se comprueba que la persona continua con la

calidad o condición de invalida, ello conlleva inexorablemente a la conservación del derecho pensional, no obstante, si se advierte que ya no cuenta con el estado de invalidez, ello trae consigo la extinción de la prestación e, incluso, también se puede dar el caso en que se disminuye el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, lo cual puede dar lugar a la reducción del monto de la prestación, a lo cual debe proceder la respectiva entidad administradora de pensiones o aquella que tenga a su cargo el pago de la mesada, según sea el caso.

Ahora, tampoco puede perderse de vista que si bien la norma alude a la extinción del derecho cuando cesa el estado de invalidez del pensionado, también lo es que, dicho precepto establece la posibilidad de que la persona “*que alegue permanecer inválido*”, **readquiere el derecho**, previa existencia de un nuevo dictamen que así lo certifique.

Sobre la extinción del derecho a la pensión de invalidez y en un caso cuya analogía es estrecha al que hoy se analiza, ha tenido la oportunidad de pronunciarse la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 867 de 2019, al resolver una controversia relacionada con la readquisición de una pensión de invalidez que inicialmente había sido concedida al demandante por tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, pero luego, al revisar el estado de invalidez se le evaluó una PCL de 29.48%; no obstante, después de un tiempo, al realizarse un nuevo experticio, se concluyó que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral era del 52.89. Estableciéndose que a pesar de existir un dictamen en firme que arrojaba un PCL inferior al 50%, se trataba de la pensión de invalidez que inicialmente le había sido reconocida porque las patologías padecidas por el actor eran las mismas, independientemente de que en la evolución de la enfermedad hubiesen existido altos y bajos de intensidad. En dicha providencia, se indicó:

"En ese entendido, pese a lo que señala el censor, no es admisible entender que en todos los casos en que exista un dictamen que determina la cesación del estado de invalidez, ipso facto, se dé la extinción total del derecho pensional que se venía

disfrutando pues, como se indicó, la misma norma (artículo 44 de la Ley 100 de 1993) permite la readquisición o reanudación del derecho pensional, cuando exista un dictamen posterior que dé cuenta de la existencia de la invalidez, máxime si, como en el caso concreto, de ese diagnóstico ulterior es posible concluir, que deviene de las mismas patologías que, inicialmente, conllevaron el reconocimiento del derecho pensional. Nótese en este punto, que todos los dictámenes refieren el mismo diagnóstico de «artrosis de cadera derecha o coartrosis derecha, necrosis avascular» y dificultad del actor para desplazarse.

No puede desconocerse que durante la evolución de una enfermedad es posible que existan altos y bajos en su intensidad, en los que se registre un incremento en la gravedad de la dolencia o, por el contrario, la recuperación de la salud del paciente, al punto que se diagnostique la inexistencia de la invalidez. Sin embargo, en este último caso, no puede darse una interpretación rígida y automática del artículo 44 de la Ley 100 de 1993, en lo que atañe a la extinción del derecho pensional, pues puede ocurrir que esa recuperación diagnosticada sea temporal, pasajera y producto precisamente de la fluctuación de la patología, caso en el cual, si se logra evidenciar que la reanudación del estado de invalidez se dio por la agravación del mismo padecimiento inicialmente calificado, resulta desproporcionado asegurar que, en todo caso, el derecho pensional feneció y que ante el nuevo estado de invalidez, la persona está en la obligación de solicitar, nuevamente, el reconocimiento del derecho pensional, atado a unos requisitos legales que para aquel momento pueden ser más gravosos.”

Sobre el particular véase también la sentencia SL2599 de 2019.

De igual forma, no puede perderse de vista que, en los casos en los cuales a una persona que se le haya reconoció la pensión de invalidez, y después de ello goza de una recuperación, y luego vuelve a decaer por la misma patología, la cual, la lleva de nuevo a la invalidez, tenga que solicitar el derecho pensional, como si fuese la primera vez, y acogerse a los requisitos legales con las modificaciones introducidas por un nuevo régimen legal, pues, puede suceder que precisamente por su estado de invalidez, el trabajador puede estar apartado del mercado laboral e inactivo en el pago de aportes al Sistema, resultándole casi imposible cumplir con una densidad de cotizaciones como la establecida en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003.

Así las cosas, y al ser posible debatir judicialmente los dictámenes emitidos por Colpensiones, en tanto, dentro de un trámite ante la justicia ordinaria se puedan acreditar, por cualquier medio probatorio, los errores en que pudo haber incurrido una pericia, atendiendo que, en los juicios laborales, al tenor del

artículo 51 del C.P.T., son admisibles todos los medios de convicción previstos por la Ley, y que acuerdo con ello, las partes tienen libertad probatoria, pudiendo demostrar sus sustentos fácticos por el que les resulte más apropiado, teniendo como único límite los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia, y al haberse practicado dentro del proceso dictamen, el cual fue rendido por la IPS Universitaria, entidad que determinó que la señora Estela Arbeláez, presenta un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 50,8% estructurada el 9 de diciembre de 2018, por los diagnósticos de *"deficiencia pro artrosis de rodillas y manos bilateral, deficiencia por trastorno afectivo bipolar, deficiencia por síndrome del túnel del carpo moderado bilateral"*, y que el mismo se encuentra, de acuerdo a la información contenida en el expediente y a la calidad de la institución por la cual fue rendido, acorde a lo dispuesto en los artículos 226 y s.s del C.G.P., normas aplicables en virtud de la remisión establecida en el artículo 145 del C.P.T. y la SS., es posible así, otorgarle mérito probatorio y con ello entrar a determinar si la calificación se basó en criterios técnicos, pruebas e historias clínicas y valoraciones científicas, encontrando que tal y como se observa en el expediente digital y como lo manifestó al momento de realizar la declaración el Doctor Juan Diego Zapata Serna, se tuvieron en cuenta tanto las evaluaciones técnicas como las ayudas diagnosticas realizadas, tales como, electromiografías de alta tecnología, rayos X, resonancias magnéticas, así como las citas médicas a las que asistió en la institución Samein, y las hospitalizaciones por trastorno afectivo bipolar, encuadrando la *"deficiencia por artrosis de rodilla y manos bilateral"* en el capítulo III, tabla 3.2 – 3.3. clase I y II, la *"deficiencia por trastorno afectivo bipolar"* en el capítulo XII, tabla 12.4.4, clase II, y la *"deficiencia por síndrome túnel del carpo moderado bilateral"* en el capítulo II, tabla 2.7, clase II + dominancia, con un total de deficiencia del 28,3%, de discapacidad 5.0% y de minusvalía de 17,5%, conclusiones a las cuales se corrobora que llegó de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos en el manual para emitirlo, ello es, el Decreto 917 de 1999, al haber sido la disposición que utilizó Colpensiones cuando le revisó la calificación de su estado de invalidez, y concluyó que no presentaba una pérdida de capacidad laboral superior al 50%; por lo que al

encontrarse las clasificaciones y porcentajes asignados dentro de los lineamientos y límites de este manual, a más que también se ve reflejado, como ya se hizo mención, en la apreciación de las ayudas diagnósticas y valoraciones, a fin de demostrar la pérdida de capacidad laboral de la demandante, resulta viable, tal y como lo concluyó la juez de instancia, darle valor probatorio.

Así las cosas, y teniendo en cuenta los anteriores medios de convicción, junto con los supuestos fácticos indiscutidos, es claro para la Sala que la patología por la que inicialmente le fue reconocida la pensión de invalidez a la demandante es la misma que padecía para el 9 de diciembre de 2018, data en que la Facultad Nacional de Salud Pública le calificó una pérdida de capacidad laboral del 50,8%, pues, nótese como en dictamen 3536 del 22 de octubre de 2001, el ISS calificó a la actora con una pérdida de capacidad laboral del 53,50% estructurada el 21 de octubre de 2001, por el diagnóstico de "*depresión mayor*" y en el dictamen de la facultad rendido dentro del proceso se le calificó "*trastorno afectivo bipolar*" pudiéndose concluir, incluso, que para la fecha del último experticio, las enfermedades padecidas por la señora Estela Arbeláez aumentaron de manera considerable, pues, además del trastorno afectivo, sufría de "*deficiencia pro artrosis de rodillas y manos bilateral*" y "*deficiencia por síndrome del túnel del carpo moderado bilateral*", circunstancias estas que se asemejan a lo considerado en el caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en la sentencia SL2599 de 2019, por lo que al tener la actora una PCL superior al 50% al haber persistido la enfermedad inicialmente valorada, la cual, incluso empeoró con otros diagnósticos, acertado resulta entender que no existió una extinción del derecho pensional y que lo que aquí debe operar es la reanudación o reactivación del disfrute de la pensión previamente concedida, prevista en el mismo artículo 44 de la Ley 100 de 1993, tal y como lo decidió la juez de instancia, resultando procedente confirmar la sentencia.

Realizado el cálculo del retroactivo, en razón a un salario mínimo y 14 mesadas al año, se encontró que el liquidado por la a quo se encuentra acorde a derecho, razón por la cual se confirma la decisión en este apartado, así como la indexación de las mesadas pensionales, en aras del restablecimiento de su poder adquisitivo, depreciado por el fenómeno inflacionario, lo que encuentra sustento en el artículo 53 de la Constitución Política y en criterios de justicia y equidad, pues no se puede admitir pago liberatorio en relación con una suma cuyo valor se ha envilecido por el transcurso del tiempo, y en cuanto autorizó a Colpensiones para que del monto de las mesadas ordinarias adeudadas efectuó el descuento de los aportes a salud a cargo de la demandante.

En relación con la condena en costas, en la que se incluyen las agencias en derecho, al ser una simple consecuencia procesal del ejercicio de la acción o de la excepción, se traduce en una obligación que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir (auto Sala de Casación laboral Corte Suprema del 24 de enero de 2007, radicado 31.155, reiterado en sentencia SL 5141-2019), por lo que se confirma también la decisión en este apartado.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Luz Estela Arbeláez Amaya** en contra de **Colpensiones**.

Sin costas en esta instancia por conocerse la actuación en grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el 15 del Decreto 806 de 2020.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 92** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, **28 de mayo de 2021**

Secretario

RETROACTIVO PENSIONAL						
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2018	3,18%	1,46	\$ 0	\$ 0	\$ 781.242	\$ 1.140.613
2019	3,80%	14	\$ 0	\$ 0	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020		14	\$ 0	\$ 0	\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021		2	\$ 0	\$ 0	\$ 908.526	\$ 1.817.052
TOTAL			\$ 0		TOTAL	\$ 26.840.531